



**ESTIMADO SOLICITANTE
P R E S E N T E.**

Por medio del presente y en atención a su solicitud de información pública presentada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, identificada con el número de folio 211200423000845, que textualmente establece:

"SE SOLICITA DIVERSA INFORMACION RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAUDOS LABORALES POR ESTA SECRETARIA. ADJUNTO ARCHIVO PARA VISUALIZAR COMPLETAMENTE LA SOLICITUD"(sic)

Y a la que adicionalmente le adjunta en documento anexo lo siguiente:

"A esta H. Unidad de Transparencia de esta Secretaria, solicito la siguiente información pública en su versión digitalizada:

1.- Respecto del Juicio Laboral D-57/2013 de la que fue demandada esta Secretaria de Educación, le solicito la siguiente información pública:

1.1.- Pido COPIA CERTIFICADA de todos y cada uno de los oficios, memorándums, acuerdos, o cualquier documento y/o expresión documental emitidos por cualquier funcionario de este sujeto obligado o de otro pero que obren las documentales en posesión de este para CUMPLIR el laudo a favor del trabajador.

***1.2.- Pido COPIA DIGITALIZADA del CONVENIO por el que se pagaron todas las prestaciones al trabajador
(Al JDO 4 AD. 111/2022)***

2.- Se conoce que desde el año 2019 al 08 de diciembre de 2023, esta Secretaria tuvo 32 laudos pendientes de pago al veintitrés de diciembre de 2023, por lo que le solicito:

***2.1.- Le pido una lista con el número de expediente, la fecha de emisión del mismo y el monto a pagar respecto del mismo.
(RR-0069/2024)***

3.- Se conoce que desde el 2019 al 08 de diciembre de 2023, esta Secretaria reinstaló a 7 Maestros, por lo que le solicito:

3.1.- Le pido una lista con el número de expediente o nomenclatura para llevar a cabo la reinstalación, ya sea números de nomenclaturas internos así como el número de expediente del juicio laboral, si así fue; la fecha de emisión del mismo y la fecha de reinstalación del trabajador.

***3.2.- Pido COPIA CERTIFICADA de todos y cada uno de los oficios, memorándums, acuerdos, o cualquier documento y/o expresión documental emitidos por cualquier funcionario de este sujeto obligado o de otro pero que obren las documentales en posesión de este, para CUMPLIR el laudo a favor del trabajador.
(RR-0069/2024) "(sic)"***

Con fundamento en los artículos 2 fracción I, 5, 6, 15, 16 fracción IV, 142, 156 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 31 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5, 7, 8, 100, 103, 104, 105, 106 fracción I, 109 y 113 fracción VII, X, XII, 114 y 115 de la Ley General de Transparencia; los correlativos 113, 114, 115 fracción I, 116, 117, 118, 122, 123 fracción VI, XI y XI, 124, 125 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como los Lineamientos Primero, Cuarto, Quinto, Séptimo fracción I, Octavo, Vigésimo Cuarto, Trigésimo Tercero, Trigésimo



Cuarto, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; 15, 60 fracciones XVI y XIX y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, me permito informar lo siguiente:

Conforme a la prueba de daño proporcionada por el área competente para realizar la clasificación de la información se procedió en tal sentido atendiendo a lo siguiente:

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 6º párrafo segundo, apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se permite el acceso a la información y los documentos de las entidades públicas y demás sujetos obligados de manera eficaz, oportuna, veraz y gratuita. Sin embargo, no debe soslayarse que el referido precepto constitucional establece límites al ejercicio del mismo, en razón del interés público y de la seguridad nacional, como claramente se establece al tenor literal siguiente:

"Artículo 6.

(...)

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes. ...".

Puede decirse que todo acto de gobierno es de interés general y, en consecuencia, es susceptible de ser conocido por todos sus gobernados; sin embargo, como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de acceso a la Información no puede caracterizarse como absoluto, por el contrario, su ejercicio está acotado en función de ciertas causas e intereses relevantes, sujeto a excepciones, y su cauce, así como a las vías precisadas para ello, basta observar el criterio de la siguiente tesis:



"Época: Novena, Registro: 191967, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. LX/2000., Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD. COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la Información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeta a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados".

De lo anterior, se advierte que la información que bajo su resguardo tienen y deben proporcionar los sujetos obligados del Estado, encuentra como excepción aquella que sea reservada o confidencial, cuyos supuestos se encuentran contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, cuando de su difusión pueda devenir en perjuicio a la seguridad nacional, violación de los intereses de la sociedad o los derechos de los gobernados.

A fin de sustentar el extremo de excepcionalidad, el precepto legal 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, establecen un catálogo de hipótesis y/o causales bajo las cuales deberá reservarse la información, siendo estas las siguientes:

"ARTÍCULO 123. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada:

- I. La que comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;**
- II. La que pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;**
- III. La que se entregue al Estado Mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de**



violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;

IV. La que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;

V. La que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VI. La que obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los integrantes del sujeto obligado, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

VIII. La que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

IX. La que afecte los derechos del debido proceso;

X. La que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XI. La que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales".

En el caso que nos ocupa, la causal que da procedencia a la reserva de la información se sustenta en el artículo 123 fracción IX y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el cual a la letra establece:

"Para los efectos de esta Ley se considera información reservada:

"...IX. La que afecte los derechos del debido proceso...

...X. La que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado..."

Por su parte, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en su Vigésimo Noveno, señala lo siguiente:

"... Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:

I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;

II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;

III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y

IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso..."



De la misma forma, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en su Trigésimo Primero, señala lo siguiente:

"... Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada..."

De la concatenación de la Ley de la materia y de los Lineamientos antes señalados, se desprenda la causal que sustenta la presente prueba de daño; causal que de ser soslayada ignorada podría llevar a la difusión de la información solicitada por diversos cauces, que pudieran traer como resultado la vulneración del debido proceso en el desahogo de las audiencias judiciales que deriven de una demanda laboral, al tratarse de asuntos en trámite, donde esta Secretaría es parte de la controversia.

Esta Secretaría, determina que no viola el derecho público subjetivo del solicitante al declarar como reservada la información solicitada, la cual se relaciona con la diversos demandas laborales que se promovieron en contra de esta Dependencia, pues el principio de publicidad, como hilo conductor de las actuaciones en el sistema de justicia, no debe confundirse con el derecho de acceso a la información, del cual se refiere al acceso a los documentos tanto físicos, en base de datos como registros electrónicos, digitales o de videograbación, que se generen en el marco del derecho mexicano; por tanto, conforme a la definición de "documento" establecida en el artículo **3, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, que a la letra dictan:

"...Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

VII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,



convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;..."

La documentación que se ha generado por la presentación de una demanda laboral o de las diversas audiencias en las que esta Secretaría es parte, la cual se pretende acceder en ejercicio de su libre derecho a la información por medio de una solicitud, en la que se pretende conocer la información agregada o particularizada sobre los expedientes laborales y en general la información que de ellas se exponga y derive, atendiendo en principio de cuentas el derecho y las modalidades de acceso a la información de las cuales este departamento reserva en virtud de que se encuentra sujeto a lo ordenado por el Honorable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, misma que depende de la Secretaría de Trabajo del Estado de Puebla, como lo establece el **artículo 36 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla**, el cual establece:

"...ARTÍCULO 36 A la Secretaría de Trabajo le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VI. Coordinar la integración y establecimiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, así como vigilar el funcionamiento de éstos y llevar, a través de dicha Junta Local, el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales que funcionen en el estado, de conformidad con las disposiciones aplicables..."

Artículo en el que se establece de manera clara quien es la persona obligada idónea para proporcionar la información solicitada; es decir, la Secretaría del Trabajo a través del Tribunal de Arbitraje.

Por tanto es incuestionable que hacer públicos los datos que se encuentran contenidos en los diversos juicios laborales de los que es parte esta Secretaría, equivaldría a revelar datos determinados y determinantes que afectarían de manera directa el desarrollo de las diversas audiencias laborales; por tratarse de información que –como ya se dijo- su uso y manejo para esta Dependencia, se sujeta a lo ordenado por la autoridad laboral, tal y como se dejará acreditado con base en los argumentos que en líneas posteriores se esgrimen, tendentes a justificar la clasificación de la información señalada como reservada.



De conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se procede a colmar y justificar los supuestos de la PRUEBA DE DAÑO al tenor de las siguientes manifestaciones que sustentan y justifican la misma:

I. LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL, DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE DE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL INTERÉS PÚBLICO.

El perjuicio al interés público, se surte al revelar la información que es clasificada como reservada, la cual tiene un vínculo directo y estrecho entre el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) cuando se trate de calves presupuestales de origen federal, la Secretaría de Administración y Finanzas cuando se trate de una clave presupuestal de origen estatal, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y esta Secretaría de Educación del Estado de Puebla, dependencias directamente ligadas por motivo de la información pública generada y que –como se reitera- se origina ante la presentación de demandas laborales y que, como consecuencia puede derivar en un laudo a favor o en contra de esta Secretaría, condenando a la reinstalación, pago de prestaciones o ambos, de ahí que resulte imperativo no poder entregar la misma por ser información relacionada entre las dependencias antes mencionadas, al tratarse de procedimientos en materia laboral, que involucran a las ya referidas. Siendo el Tribunal de Arbitraje la que emite el laudo, funge como parte demanda esta Secretaría y la Secretaría de Administración y el FONE quienes realizan las gestiones para dar cumplimiento al pago de la cantidad laudada dentro de los juicios laborales.

Además, otro riesgo latente es la dispersión o diseminación de la información por parte de la persona solicitante, ocasionando la problemática de entorpecer las decisiones de la autoridad laboral, así como, divulgar la información con la finalidad de influir y/o provocar la movilización de todos los que forman parte de los juicios laborales con el objetivo de generar presión social ante esta dependencia, situaciones contrarias a los propios objetivos del debido proceso y la normatividad aplicable y que pudieran derivar en la alteración del laudo correspondiente.

II. EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA EL INTERÉS PÚBLICO GENERAL DE QUE SE DIFUNDA.

Revelar o hacer pública la información que se solicita, la cual se encuentra contenida en los expedientes laborales, siendo estos, oficios, memorándums, convenios, laudos, acuerdos, expedientes personales y demás documentos que forman parte de los archivos de esta Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla; vulneraría



en primer término, el derecho fundamental al debido proceso y en segundo término, afectaría de manera directa los procedimientos y audiencias que se deriven de la presentación de demandas laborales; por otra parte, podrían afectar los datos de prueba, o las resoluciones judiciales que correspondan; de igual manera, afectaría la rendición de informes hechos a diversas autoridades, e inclusive, la determinación de la cantidad laudada y las reinstalaciones que correspondan, pondría en riesgo la seguridad de la parte actora y demandada, jueces, magistrados y, en general, contra todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, su vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente.

El propósito primario de la causal de RESERVA es salvaguardar los procedimientos laborales iniciados en todas sus etapas hasta la emisión de un laudo firme; sin embargo, pero para que estos aspectos puedan ser satisfechos íntegramente, deben estar alejados de interferencias externas, como puede ser el escrutinio público o la emisión de señalamientos y opiniones externas dadas, carentes de sustento o base técnica que puedan traer como consecuencia demora o alteración en su eficiente ejecución.

De tal suerte resulta menester reservar la información y todos los elementos materiales que a ella se constriñen, mismos que le fueron solicitados a esta Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, por tratarse de asuntos en materia laboral y tener relación directa y estrecha con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la Secretaría de Administración y Finanzas y el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; dicha reserva supera el interés público de que la información se revele, razón por la cual, dar a conocer la información requerida por el solicitante y en caso muy probable, a la ciudadanía, por virtud de la propagación de la misma, afectaría su conducción, con ello la independencia y autonomía de las autoridades antes mencionadas.

Ahora bien, el propósito primario de la causal de RESERVA es salvaguardar el procedimiento laboral en todas sus fases, hasta la emisión de un laudo firme; por lo que, deben estar alejados de interferencias externas, como puede ser el escrutinio público o la emisión de señalamientos y opiniones ajenas que puedan traer como consecuencia la demora o influencia en su resultado y ejecución, por lo que este sujeto obligado Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, se encuentra impedida legalmente para entregar la información solicitada, pues se infligiría un daño en las resoluciones emitidas en los procedimientos laborales, cuyos datos están sujetos a la misma, la cual versa sobre información pública generada, obtenida y conservada por este ente obligado, pues la responsable es la Secretaría del Trabajo a través del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla.



De tal suerte, resulta necesario reservar la información contenida en los diversos expedientes laborales en etapa de instrucción y/o ejecución, de las que es parte la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla y todos los elementos materiales que le constriñen, pues dicha reserva supera el interés público, por lo cual, dar a conocer la información requerida por el solicitante afectaría su conducción y con ello la independencia y autonomía de la autoridades que intervienen dentro de los procedimientos que como han quedado claro, tienen una naturaleza laboral; en virtud de la divulgación de la información que en ellas obra. De ahí que, difundir la información no supera el interés de que la misma se conozca, pues el daño sería mayor al beneficio, en caso de darse a conocer.

III. LA LIMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA EVITAR EL PERJUICIO.

Los diversos expedientes laborales motivo de una demanda laboral, tienen diversas etapas procesales, así como formalidades que se deben cumplir para formalizar las diligencias, requerimientos, promociones, acuerdos y actuaciones, y el compendio total de las constancias que la integran forman un continente o universo integral y sistemático, por ello, no es posible realizar una versión pública de la información solicitada, además de que, corresponde al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. De tal suerte, publicar o difundir en todo o en parte el contenido de la información que compone la misma, tendería a obstaculizar las atribuciones de la Secretaría de Administración y Finanzas y del Honorable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; por lo que, en caso contrario, la revelación de dicha información en cualquiera de sus formas vulneraría el análisis y el ejercicio de sus facultades como autoridades ordenadoras y ejecutoras.

La clasificación de la información como reservada es el mecanismo idóneo para evitar el perjuicio que pudiese existir por dar a conocer la información, actuaciones y documentos que conforman los expedientes laborales y toda vez que las mismas están en trámite, y por ende sin concluir; por lo que, dar a conocer la información vulneraría el ámbito de competencia de las autoridades involucradas e incluso podría la determinación de posibles hechos que pudieran constituir responsabilidades públicas; al caso en concreto tiene aplicación la siguiente tesis aislada que a la letra establece:

"Época: Décima Época. Registro: 2002944. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: I.4o.A.40ª (10a.). Página: 1899



ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sé advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce, el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 743. de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTIAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional pues se trata de un derecho fundado en uno de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, consideraría con una calidad diversa".

De lo anterior, podemos advertir, que, si bien es cierto, la información en poder del Estado debe ser de dominio público, este derecho también admite la posibilidad de restringirse como una excepción.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.

ATENTAMENTE

**Secretaría de Educación
Unidad de Transparencia
Tel. (222) 229.69.00 Ext. 1008.**

Se informa a usted, que en el supuesto de que exista inconformidad con la respuesta brindada por este Sujeto Obligado, podrá interponer Recurso de Revisión, de conformidad con los artículos 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla